

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por el C. Jesus Blanco, contra la providencia del C. Gefe político del Partido de la Capital de ese Estado, que lo condenó á sufrir quince dias de prision, en defecto de cincuenta pesos de multa, por haber publicado un impreso suelto.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor dice: que el C. Jesus Blanco, acusa el hecho de haber sido condenado á 15 dias de prision, en defecto de cincuenta pesos de multa que le impuso el C. Gefe político de la Capital, como responsable del impreso de fojas 1^a de esta pieza, y contra tal hecho solicita amparo de la Justicia de la Union, por la violacion de las garantías que otorga el artículo 7º de la Constitucion general de la República, por estar comprendido el caso, en la fraccion 1^a del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Como previamente se pretendió por el quejoso la suspension del acto de la prision impuesta, ese Juzgado atendiendo á la urgencia notoria del caso, tuvo á bien decretar y pedir el informe que previene el artículo 9º de la citada ley de 20 de Enero de 1869.

Por él pues, se vé, que el C. Gefe-político, refiriéndose á los propios fundamentos que emitió en el juicio de amparo del C. Andres Campillo, se apoyó tambien en la facultad que le concede la fraccion 17 del artículo 11 del decreto que bajo el número 39 expidió el 4º Congreso constitucional del Estado, y ya el ministerio tiene manifestado, que por tratarse en el caso de un delito de imprenta, y que las faltas ó injurias que se dice cometidas al Ejecutivo del Estado, no son inferidas en el ejercicio de sus funciones, no pueden ser escarmentadas por la autoridad política ó administrativa,

sino por la que determina el artículo 7º de la misma Constitucion general, y en esta virtud, siendo que se ha hecho la aplicacion de aquella pena fuera de los términos y modo que establece la ley, por un funcionario extraño ó incompetente, ha habido abuso de autoridad y se han violado tambien las garantías individuales que concede igualmente el artículo 21 de aquella suprema ley.

En consecuencia, y con respecto al caso ocurrido con el C. Jesus Blanco y el Gefe político de este Partido, no puede ponerse en duda la infraccion notoria de aquellas prerogativas, y la Justicia federal, con fundamento de lo que dispone la ley de 20 de Enero de que se ha hecho mérito, está en el deber de dispensar al citado Jesus Blanco el amparo y proteccion que solicita.

Tal es mi parecer: ese Juzgado no obstante, resolverá lo que creyere mas conforme á justicia.

San Luis Potosí, 1º de Junio de 1874.

Es copia. San Luis Potosí, 3 de Junio de 1874.—Gregorio Vazquez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, 1º de Junio de 1874.—Visto el ocurso del C. Jesus Blanco, en que pide amparo y proteccion de la Justicia federal, contra la providencia del C. Gefe político del Partido de la Capital que lo condenó á sufrir quince dias de prision, en defecto de cincuenta pesos de multa que no pudo enterar, por haber dado á luz un impreso suelto, en que infiere agravios á ese funcionario, con cuyo hecho se ha violado en la persona del quejoso, la garantía que sanciona el artículo 7º de la Constitucion, fundando la queja en la fraccion 1^a artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869; el informe con justificacion de la autoridad ejecutora en que expresa: que al proceder así, ha hecho uso de la facultad que le concede el artículo 11 fraccion 18 del decreto número 39 de la 4ª H. Legislatura del Estado,

reglamentaria del artículo 21 del Pacto fundamental, y 54 fracción 17 de la Constitución particular del Estado; el pedimento del C. Promotor fiscal, conforme en que se conceda el amparo solicitado, y lo demás que consta de autos.

Considerando: que en los asuntos de imprenta y librería, solo pueden intervenir ó son competentes, los jurados que crea el artículo 7º del Pacto federal, para calificarlos impresos que se denuncien, aplicar el derecho y designar la pena, mediante los procedimientos y formalidades que marca la ley orgánica de la libertad de la prensa de 4 de Febrero de 1868; lo cual quiere decir, que los delitos ó abusos que se cometan por la prensa, no pueden ser castigados por la autoridad política ó administrativa en uso de la atribución que le concede la parte 2ª del artículo 21 de la misma Constitución general, porque esta facultad está limitada en el caso especial de abusos de la libertad de imprenta, por el artículo 7º del propio Código.

Por lo expuesto, de conformidad con lo pedido por el quejoso y el C. Promotor fiscal, y hallándose el caso comprendido en la fracción 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, debía declarar y declarar: que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Jesus Blanco, contra la providencia que dió origen al presente recurso.

Hágase saber; publíquese y elévense estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revisión.

Lo decretó y firmó el C. Juez. Doy fé.—
Firmado.—*Conrado Díaz Soto*.—*Donaciano Monroy*, secretario.

Es copia que certifico. San Luis Potosí, 1º de Junio de 1874.—*Donaciano Monroy*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 23 de Junio de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por el C. Jesus Blanco, contra la providencia del C. Gefe político del Partido de la Capital, que lo condenó á sufrir quince días de prisión en defecto de cincuenta pesos de multa, por haber publicado un impreso suelto en que agravia á aquel funcionario, con cuya determinación se infringe la garantía consignada en el artículo 7º de la Constitución. Visto el informe de la autoridad responsable; el pedimento fiscal y la sentencia del inferior.

Considerando: que la Constitución federal ha querido de un modo absoluto, colocar la libertad de imprenta fuera del alcance de toda acción administrativa ó política, por considerarla la garantía mas positiva de los derechos del hombre, instituyendo para los delitos que pueda ocasionar el abuso de esta libertad, un Tribunal excepcional, en su artículo 7º en su parte 3ª.

Que en consecuencia, ningún motivo, por grave y fundado que sea, puede autorizar una violación de esta prevención constitucional. Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del C. Juez de Distrito que amparó al C. Jesus Blanco.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias*.—*Miguel Auza*.—*Juan J. de la Garza*.—*José María Lozano*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramírez*.—*Manuel de Castañeda y*

Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—Simon Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, 8 de Octubre de 1874.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Morelos contra el C. alcalde 2º del Ayuntamiento de Cuautla Morelos, José Coria, por trasgresion de las leyes de Reforma.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Cuernavaca, 18 de Febrero de 1874.—Vista esta causa mandada instruir por el Gobierno del Estado, al Juez de 1ª instancia de Cuautla Morelos, contra el C. alcalde 2º José Coria, porque habiendo firmado un oficio en que se nombraba al C. Librado Pérez mayordomo de la capilla de Guadalupe de aquella Ciudad, se creyó que se había ingerido en negocios eclesiásticos, los que por el artículo 1º de las adiciones constitucionales son ajenos é independientes de los funcionarios civiles, por la separacion decretada entre la Iglesia y el Estado; y comprendido por lo mismo ese acto, en la disposicion del artículo 23 y 3º relativo de la ley de 12 de Julio de 1859. Vistas las primeras respuestas del acusado, en que negaba á declarar ante el citado Juez, alegando ser oficial, y del conocimiento de la Justicia federal, el delito que se le imputaba en lo que se sostuvo, hasta que por este Juzgado se mandó que declarase, porque el artículo 7º de la ley de 6 de Diciembre de 1856 por la que se juzgan los delitos contra el órden público, cual lo es el de conspiracion, faculta al Juez local para la formacion del sumario. Vista la preparatoria del reo; las declaraciones de los testigos Pedro Sandoval y Librado Perez; la del ex-secretario Lauro

Correa y secretario Miguel Barco, con los careos entre estos y el acusado Coria: la confesion con cargos; defensa formada por el Lic. Pedro Robles, con los documentos que adjunta, y citacion para definitiva, de todo lo cual resulta:

Que habiendo renunciado el cargo de mayordomo de la capilla de Guadalupe, el C. Pedro Sandoval, se dió cuenta al Ayuntamiento con esa renuncia, y á mocion de un concejal, se acordó que en lo privado se nombrase para tal encargo al designado por el mismo que renunciaba, por ser ageno de la Corporacion mezclarse en asuntos tocantes á la Iglesia ó á un culto religioso; y autorizado el 2º alcalde por ese acuerdo, ordenó al secretario Correa extendiese el nombramiento; pero Correa, por estar entregando la oficina al nuevo secretario, le dictó al día siguiente el nombramiento, en los términos de costumbre, esto es, haciéndolo á nombre del Ayuntamiento, lo que dió origen á que llegando á conocimiento del Gobierno del Estado tal oficio, mandase suspender y encausar al alcalde que lo suscribía, en vez de consignarlo como debia, á este Juzgado, ya que lo creía incurso en las penas del artículo arriba citado.

Considerando: que no habiendo habido malicia, ni intencion dañada en el C. alcalde 2º, al nombrar mayordomo ó mas bien cuidador de una capilla pública, con la autorizacion privada del Ayuntamiento, ó la persona propuesta por el renunciante, no cometió delito alguno, sino á lo mas un error excusable, pues siendo la capilla del pueblo, y no ocurriendo este al cura párroco para el nombramiento de mayordomo, ni rindiéndole cuentas de su manejo, sino á la Corporacion que representa al Municipio, mas bien separaba de la ingerencia eclesiástica, el cuidado de un edificio propio del Municipio, en vez de ingerir á este en cosas de la Iglesia, siendo este acto muy semejante al cuidado de un hacendado por la capilla de su hacienda, ó al de un particular por el oratorio privado de su casa.